

El eje orinoco apurè: una visión reaccionaria del desarrollo

Cuando se trata de desentrañar lo que esos planteamientos proponen como una revolución territorial, uno se encuentra con que lo que está en juego son viejas proposiciones de sesgo francamente antiurbano que se intentan justificar tras la pretendida búsqueda de unos nunca bien definidos "equilibrios territoriales".

MARCO NEGRÓN

En 1999 Venezuela vivió el estreno de un gobierno que, conforme a sus propias palabras, se propone la muy ambiciosa tarea de "refundar la República", las bases de la cual habrían sido echadas por la Asamblea Constituyente elegida en julio de 1999. Aunque en sentido estricto no forma parte de la nueva Constitución Bolivariana, la política territorial que desde aquel estreno, y aún antes, viene proponiéndose, constituye uno de los elementos más vistosos de esa pretendida refundación. Partiendo implícitamente de la hipótesis de una persistente irracionalidad durante los 500 años de historia del territorio que hoy se conoce como Venezuela, ella formula la necesidad de una radical transformación de los patrones históricos de ocupación que se puede resumir en menos de diez palabras: llevar al sur lo que está al norte, identificando su motor en un misterioso "proyecto de desarrollo del eje Orinoco-Apure".

Cuando se trata de desentrañar lo que esos planteamientos proponen como una revolución territorial, uno se encuentra con que lo que está en juego son viejas proposiciones de sesgo francamente antiurbano que se intentan justificar tras la pretendida búsqueda de unos nunca bien definidos "equilibrios territoriales". Ellas se expresan emblemáticamente en declaraciones de altos funcionarios que, para asombro de los conocedores, vuelven a desempolvar las ajadas "tesis" del colonialismo interno y los equilibrios territoriales, lo que inevitablemente desemboca, como también ocurrió en buena parte de los ahora vituperados últimos cuarenta años de vida democrática, en una propensión a postergar el desarrollo y, sobre todo, la ordenación de la Venezuela urbana en busca de un supuesto beneficio de lo rural. La experiencia -tanto la venezolana como la internacional- revela que esto significa abrir un juego en el que se pierde en ambos tableros.



Retórica revolucionaria vs. práctica contrarrevolucionaria

Un primer aspecto que es preciso destacar es justamente el de un régimen que anuncia grandes transformaciones en la organización de la sociedad, que no duda incluso en adjudicarse el comprometedor calificativo de revolucionario, pero que en una materia tan importante como la territorial se coloca como agente de la recuperación de proposiciones desechadas hace mucho, tanto por la reflexión teórica como por la propia dinámica de lo real. El centro de esas proposiciones, como se ha dicho, lo constituye el llamado proyecto de desarrollo del eje Orinoco-Apure, que pareciera querer suplir la evidente ausencia de proyectos específicos con una retórica que en ocasiones llega a rozar la megalomanía.

Esto último lo ejemplifican admirablemente las declaraciones del gobernador de uno de los estados "beneficiarios" de esa proposición, según el cual ella generaría "seiscientos mil empleos directos" (El Mundo, 22/4/99). Suponiendo moderadamente que a su vez cada uno de ellos generara dos indirectos y multiplicando el total de empleos por el tamaño medio familiar se tendría la bicoca de 9 millones de nuevos habitantes asentados en ese eje: ¡la tan criticada concentración de la franja norte-costera se habría mudado al sur!. Aunque evidentemente ofrece mucha tela que cortar, se dejará esta anécdota como lo que es para ir a los asuntos de fondo.

Los argumentos para resucitar ese proyecto son sorprendentemente los mismos de hace veinte años o más: el costo de trasladar el agua a Caracas y la riqueza sobre todo mineral de los

territorios interesados por dicho eje (ver el artículo "El país se muda para el sur", El Universal del 30/5/99).

El primer argumento es en extremo sospechoso porque se apoya en el costo que implica bombear esa agua, que viene de cuencas más bajas, hasta los 900 m.s.n.m. de la ciudad capital: ante todo porque ella es la única aglomeración urbana de significación en el norte del país que presenta una localización geográfica tan comprometida desde ese punto de vista; pero además, sobre todo si como machaconamente se repite que estamos en época de cambios, porque ni siquiera se menciona la posibilidad de eliminar o al menos atenuar el subsidio implícito en éstas y otras de las tarifas actuales de los servicios urbanos.

El segundo argumento es inconsistente porque la existencia de recursos naturales sobre un territorio -especialmente si se trata de recursos no renovables como los minerales- no implica automáticamente procesos intensos de poblamiento (permítasenos recordar ahora la "hipótesis" de los 9 millones de habitantes). Es más, como lo demuestra la experiencia petrolera, tal vez lo sensato sea más bien desestimular los desplazamientos poblacionales hacia muchas de esas eventuales explotaciones. Sin mencionar la dramática parábola del emporio petrolero que fue la costa oriental del lago de Maracaibo, las dificultades y costos asociados al desarrollo de Ciudad Guayana, convertida hoy en la sexta ciudad del país y que fuera pensada como un modelo integrado de explotación minera e hidroeléctrica y de transformación industrial, deberían ser suficientemente aleccionadores. Y ya que se la menciona, si lo que se quiere es estimular el desarrollo del sur, ¿por qué empezar a inventar y no apoyarse en la importante aglomeración industrial de un millón de habitantes que ya configuran Ciudad Guayana y Ciudad Bolívar?

El marco ideológico de la propuesta

Para entender las raíces ideológicas (y estamos usando el término en su sentido riguroso de falsa conciencia) del enfoque que se viene discutiendo es inevitable hacer referencia a un documento escasamente conocido, el llamado Primer Plan Nacional de Desarrollo Territorial de febrero de 1999, coordinado por Fernando Travieso y José Pacheco, el actual viceministro de Infraestructura, en apariencia el más activo vocero en el seno del gobierno de las propuestas contra Caracas (fue él quien liderizó las protestas contra la construcción de la Línea 4 del Metro, con el único resultado de retrasar su inicio) y a favor del eje Orinoco-Apure. La importancia de ese documento reside, justamente, en que él aparece como el fundamento "teórico" de las políticas territoriales del gobierno, por lo que se hará una rápida mención de sus aspectos más resaltantes.

Allí el llamado proyecto Orinoco-Apure se plantea como la estrategia central del desarrollo nacional, al punto que es definido como "proyecto bandera" (y así lo sigue definiendo el ministro de Planificación) y como "una revolución en sí mismo"; a su descripción se le dedica, junto con los otros dos "ejes de desconcentración" propuestos, una tercera parte del magro texto. En cambio, es notoria la ausencia de un análisis aun superficial del rol que corresponde a los centros poblados existentes y al sistema de ciudades, llegándose por el contrario a plantear, incluso en términos de asignación de recursos, una contraposición a priori entre aquel "proyecto" y las políticas de consolidación de las grandes aglomeraciones urbanas. Pero además de apriorística, esa contraposición se fundamenta en una argumentación que no hace sino

resucitar aquella vieja desviación, tan deplorada ya en los años setenta, que se llamó espacialismo, un reduccionismo que a través de la organización del espacio pretendía explicar los problemas de la sociedad y, a la vez, darles respuesta. Valga como muestra este botón: "Esta problemática" -la concentración de población y actividades en el centro-norte del país- "está en la raíz de la casi totalidad de los problemas económicos, políticos y sociales que padecemos. Su gravedad es tal que puede por sí sola conducir a la paralización del país a corto plazo" (página 8). Como ocurrió siempre con los enfoques espacialistas, tampoco ahora una aseveración tan dramática y contundente está sustentada en una demostración medianamente rigurosa y objetiva: se trata, como en todo voluntarismo, de creer o no creer, al tiempo que se ignora olímpicamente el rol crucial que corresponde a ciertas externalidades propias de las grandes aglomeraciones urbanas en la dinámica económica global.

En dicho documento, como en todas las declaraciones oficiales en la materia, se manifiesta la aspiración a propiciar la desconcentración territorial, pero se ignoran hechos de bulto, verificables empíricamente, como que las inversiones que producen mayores encadenamientos a lo largo y ancho del territorio (y por tanto mayor desconcentración) son, precisamente por la razón que se acaba de anotar, las que se realizan en las regiones que han sido ocupadas más intensamente, en las que más ciudad se ha creado; la prioridad que se desprende ha sido muy bien sintetizada por François Barré, al señalar que "el gran desafío de hoy es la ciudad; el gran proyecto consiste en hacerla habitable" (Domus, mayo de 1999). En cambio, las inversiones realizadas en territorios cuyo desarrollo poblacional e infraestructural es todavía débil tienden a producir efectos tipo enclave y sus eventuales encadena-

mientos se dan, en todo caso, hacia las regiones mencionadas en primer lugar, reforzando paradójicamente la concentración que se decía combatir. Precisamente aquí pareciera residir la explicación de algunos de los problemas y desviaciones respecto a lo planeado que afectaron el desarrollo de Ciudad Guayana y que, con mayor razón, deberían afectar al tipo de desarrollo que hoy el gobierno aúpa con tanto entusiasmo.

El contenido antiurbano de las políticas que vienen perfilando los voceros gubernamentales encuentra otro núcleo explicativo en el mismo documento cuando niega, con "excepciones", la utilidad "del desarrollo industrial como instrumento del desarrollo territorial" (página 13), apostando en cambio todas sus cartas... ¡a las actividades del sector primario en general y al turismo de naturaleza!

Esa orientación ha venido registrando manifestaciones concretas, algunas vistosas, otras más solapadas. Entre las primeras se cuenta el intento de suspender la construcción de la Línea 4 del Metro (y de hecho de todos los programas de expansión futura de ese sistema), con la aspiración explícita de reorientar esos recursos hacia programas en el eje Orinoco-Apure. También nos atrevemos a atribuirle los incomprensibles retrasos en la recuperación del estado Vargas, como si se pretendiera que la desesperación de la gente los empujara a aceptar cualquier reubicación de las que está ofreciendo el gobierno.

El riesgo que hoy corremos no es el de que finalmente se materialicen esas mitologías, sino una vez más el de la dilapidación de recursos y la pérdida de tiempo a la caza de fantasmas anidados en la cabeza de algún irresponsable "constructor de sueños".

MARCO NEGRÓN
Profesor UCV
Arquitecto Urbanista

El llamado proyecto de desarrollo del eje Orinoco-Apure pareciera querer suplir la evidente ausencia de proyectos específicos con una retórica que en ocasiones llega a rozar la megalomanía.